



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-021-2020-00199-01 (O2-23-157)  
**Accionante:** LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID  
**Accionada:** JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y COLPENSIONES E.I.C.E.  
**Procedencia:** JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No. 179  
**Asunto:** NULIDAD DICTAMEN - PENSIÓN DE INVALIDEZ

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-021-2020-00199-01 (O2-23-157), instaurado por LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y COLPENSIONES E.I.C.E., con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID, respecto de la sentencia que fulminó la primera instancia, proferida el 16 de junio de 2023 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### 1. ANTECEDENTES

La señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID, actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA – JRCIA y COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de que se

declare la nulidad de los dictámenes nros. 082635-2019 y 3345509 del 2019 emitidos, en su orden, por la JRCIA y COLPENSIONES E.I.C.E., y en consecuencia, obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común a partir del 16 de febrero de 2018 a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E. De igual manera, reclama el pago de los intereses de mora sobre las mesadas pensionales adeudadas, la indexación, lo ultra y extra petita.

En respaldo de sus aspiraciones, sostiene que se afilió al RPMPD administrado por COLPENSIONES E.I.C.E., entidad oficial que le otorgó mediante dictamen nro. 3345509 del 11-abr-2019 una PCL del 35,68% y fijó como fecha de estructuración del estado de invalidez el 07 de marzo de 2019. Acota que la JRCIA en dictamen nro. 082635-2019 del 08 de noviembre de 2019, modificó a 36,52% el valor porcentual asignado por la administradora del RPMPD como PCL, y por otra, ratificó el 08 de noviembre de 2019 como fecha de estructuración del estado de invalidez.

Inconforme con las resultas del proceso de calificación del estado de invalidez, acudió al doctor José William Vargas Arenas, médico especialista en salud ocupacional, para ser reexaminada, obteniendo un tercer dictamen que dispuso modificar la fecha de estructuración al 16 de febrero de 2018, totalizando la PCL en un 54,72%. Finalmente, advirtió que ha cotizado más de 50 semanas durante el lapso comprendido entre el 16 de febrero del 2015 y el 16 de febrero de 2018, coligiendo que le asiste derecho a sus reclamaciones, privilegiando la eficacia y validez de este último dictamen pericial.

### **1.1. Trámite de primera instancia**

La demanda se admitió el 12 de enero de 2021 (doc.06, carp.01), y las demandadas JRCIA y COLPENSIONES E.I.C.E dieron contestación al libelo gestor oportunamente, dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuradora Judicial Delegada para Asuntos Laborales el 05 de marzo de 2021 (docs.09 y 10, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.11, carp.01), entidad que luego de tener por cierta la afiliación de la actora al RPMPD, junto con el contenido del dictamen emitido por la entidad competente y la respuesta brindada a la reclamación administrativa, se opuso a la prosperidad de los pedimentos con la formulación de las excepciones perentorias de inexistencia de reconocer pensión de invalidez, legalidad y firmeza de los dictámenes emitidos por Colpensiones y por la junta regional de invalidez, la determinación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración están ajustadas a derecho, específicamente al manual único de calificación de

invalidez, prescripción, compensación, inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 e imposibilidad de condena en costas.

La junta calificadora planteó oposición a las reclamaciones impetradas en su contra, presentando como medios defensivos las excepciones de: el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez es plenamente válido, la determinación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración están ajustadas a derecho, específicamente al manual único de calificación de invalidez, inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, buena fe por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y de ello se deriva la imposibilidad de condena en costas, inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar, ausencia de causa para pedir y el estado clínico de la paciente pudo variar después de que la junta regional emitió el dictamen de calificación y ello la exime de responsabilidad (doc.07, carp.01).

## **1.2. Decisión de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 16 de junio de 2023 (docs.25 y 28, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la que dispuso, absolver a las codemandadas de las peticiones formuladas en su contra por parte de la señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLIDA CADAVID, gravándola en costas.

En este sendero, el juzgador singular prescindió del dictamen adosado con el escrito demandatorio, pues a pesar de encontrarse conforme con las calificaciones brindadas al sistema visual, al sistema nervioso central y el rol ocupacional por parte del médico José Vargas Arenas, coligió que los discernimientos frente al compromiso de las extremidades superiores y del sistema endocrino no encuentran respaldo en la historia clínica ni en pruebas diagnósticas obrantes en el cartulario, advirtiendo que no resulta suficiente la valoración propia que hizo el profesional de la medicina que rindió el dictamen pericial allegado con la demanda para anular la experticia de la JRCIA (minutos 00:01 a 33:38, doc.28, carp.01).

## **1.3. Recurso de Apelación**

El poderhabiente de la promotora de la litis, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se accedan a los pedimentos formulados en el libelo inaugural. Para los anteriores propósitos, estimó que, en los conflictos de esta naturaleza, se debe abandonar el modelo médico-rehabilitador y se debe adoptar el modelo social de discapacidad, citando para el efecto

la decisión SL1171 de 2022 emanada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Tras esa consideración, el opugnantante defiende el dictamen practicado por el médico José William Vargas Arenas, pues a su juicio, el profesional explica con suficiencia los errores en los que incurrió la JRCIA al momento de determinar el estado de invalidez de su prohijada, puntualmente en los acápites de: **i.** alteraciones del sistema visual, **ii.** alteraciones del sistema endocrino, **iii.** deficiencias en el sistema nervioso central, **iv.** alteraciones en las extremidades superiores y **v.** calificación del rol ocupacional. Así razonó, en lo fundamental, que la JRCIA no calificó de forma completa las afectaciones en el estado de salud de su representada por razón del síndrome del túnel del carpo y osteoartrosis que padece en los miembros superiores, la ambliopía que afectó su campo visual y el hipotiroidismo.

En tal dirección, sostuvo que la señora MOLINA CADAVID ciertamente cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y es por ello que le asiste derecho al reconocimiento de la prestación pensional por invalidez que deprecia. (minutos 00:12 a 14:59, doc.29, carp.01).

#### **1.4. Trámite de Segunda Instancia**

El recurso de apelación formulado por la señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID se admitió el 10 de julio de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído de la misma fecha se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de así estimarlo; empero, los contendientes guardaron silencio.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada estará focalizado en los puntos de inconformidad materia de alzada,

### **2.1. Problema jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si a la señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común a partir del 16 de febrero de 2018, efecto para el que será necesario determinar en el asunto puesto a la palestra, la validez y eficacia del dictamen de PCL traído con la demanda como sustento cardinal de los pedimentos recabados

y conforme a los principios que informan la sana crítica. Asimismo, apuntalado lo anterior y de ser necesario, la Sala fincará su análisis en establecer si concurren los requisitos legales para que la afiliada cause y entre al disfrute de la referida prestación, con arreglo a las premisas normativas y criterios jurisprudenciales que rigen la materia.

## **2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala**

La Sala confirmará íntegramente la decisión de primer grado, considerando que como colofón del ejercicio ponderativo entre la prueba pericial allegada con la demanda y los demás medios suasorios incorporados y practicados en sede judicial, debe mantenerse incólume el dictamen de PCL emanado de la JRCIA, como quiera que, la valoración técnico-científica llevada a cabo por el médico especialista José William Vargas Arenas, no se acompasa con los lineamientos vertidos en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez - MUCI que se encontraba vigente para la época de la evaluación, en franca infracción a las disposiciones legales que reglamentan la materia, como se explicitará a continuación:

## **2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado**

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que la pretensora cotizó para los riesgos de IVM al RPMPD a partir del 04-sep-1980 y hasta el 31-mar-2021, acreditando 907,57 semanas (págs.08 a 17, doc.11,

carp.01); que COLPENSIONES E.I.C.E. el 11-04-2019 calificó la PCL de la actora en un 35,68%, tomando como fecha de estructuración el 07-03-2019 y determinando su origen como común (págs.13 a 17, doc.03, carp.01, carp.01); que la JRCIA varió la PCL a un 36,52%, confirmando la fecha de estructuración definida por la administradora del RPMPD (págs.20 a 25, doc.01, carp.01); que el médico José William Vargas Arenas en valoración del 23-dic-2019 estimó que la fecha de estructuración del estado de invalidez de la señora LUZ ELENA PILAR MOLINA CADAVID corresponde al 16-feb-2018, con una pérdida capacidad laboral igual a 54,72% y por cuenta de las patologías de *“(osteo) artrosis erosiva, ambliopía ex anopsia, hipertensión esencial (primaria), hipotiroidismo no especificado, síndrome del túnel carpiano y trastorno de discos intervertebrales lumbares y otros, con mielopatía”* (págs.26 a 30, doc.03, carp.01).

### **2.3.1. La calificación de la pérdida de capacidad laboral**

En lo que respecta a este tópico, conviene colacionar el contenido en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, y del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el cual reza que *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, vale decir, la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguros que asuma los riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, presentara reproche frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; siendo del caso aclarar por la Sala que, en últimas, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).*

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el aludido dictamen *“...no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne”* (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062 del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622 del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado

73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); línea jurisprudencial en la que además se reiteró que “...*al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social*”; precisando en las sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, *si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.* -Negritas intencionales de la Sala-

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juez “... *debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo* (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).

### 2.3.2 Del Caso Concreto

Revisado entonces los medios de convicción que fueran acopiados al plenario, puede afirmar esta Sala de Decisión, sin ambages ni dubitación, que la decisión adoptada por el juzgador de instancia se estima acertada, toda vez que, según los principios que informan la sana crítica, concluyó la pertinencia e idoneidad del dictamen fustigado expedido por la JRCIA, de acuerdo con los demás medios de prueba practicados y estimando aspectos tan trascendentales como necesarios, en lo atinente a **i.** los procedimientos, estándares o métodos científicos utilizados para la valoración; **ii.** el insumo o elementos materiales a los que se acudió para emitir el concepto solicitado, y; **iii.** las condiciones en que fue valorado el estado de salud del paciente.

De cara a los reproches planteados por la recurrente por activa, memora la Sala que, el dictamen en que se apoyan las aspiraciones de la accionante fue elaborado por el médico

especialista en medicina laboral y salud ocupacional, profesional de la medicina José William Vargas Arenas, quien detalló que concepto final del dictamen pericial se contrae a los siguientes valores:

CONCEPTO FINAL DEL DICTAMEN	
Valor final de la deficiencia (ponderado) - Título I	29,72%
Valor final rol laboral, ocupacional y otras áreas ocupacionales - Título II	25%
<b>Pérdida de la capacidad laboral y ocupacional (Título I + Título II)</b>	<b>54,72%</b>

Así mismo, en diligencia de sustentación del dictamen pericial, el profesional de la medicina afirmó que es especialista en Salud Ocupacional desde 1995, laborando en la División de Riesgos Laborales del entonces Instituto de Seguros Sociales – ISS durante 25 años, prestando también sus servicios a favor de la UdeA por 15 años y, actualmente ejerce su profesión de manera independiente. En lo que respecta al estado de salud de la señora MOLINA CADAVID, informó que la fecha de estructuración del estado de invalidez de aquella data del 16 de febrero de 2018, puesto que, para ese momento, las patologías del síndrome del túnel del carpo bilateral y de artrosis severa se encontraban ya presentes y sintomáticas. De igual manera justifica la determinación de la fecha de estructuración en el hecho de que, según la historia clínica de la paciente, su estado de salud no ha mostrado mejoría y tenía una evolución superior a los 540 días.

Adujo como elementos a los que acudió para la determinación del estado de invalidez y la fecha de estructuración de la misma, los dictámenes de calificación extendidos por COLPENSIONES E.I.C.E. y la JRCIA, junto con la historia clínica completa que le fue allegada. En tal contexto, explicó las diferencias principales entre la experticia desarrollada por él y la que fuera practicada por la JRCIA, en los siguientes componentes: **a.** deficiencias por alteraciones del sistema endocrino (hipotiroidismo no especificado); **b.** deficiencias por alteraciones del sistema visual (ambliopía ex anopsia); **c.** deficiencias del sistema nervioso central y periférico (síndrome del túnel carpiano bilateral) y **d.** deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores (artrosis erosiva); las que, debido a su profunda relevancia para esta controversia, se sintetizan así:



DEFICIENCIA	PATOLOGÍA	CAPÍTULO DEL MANUAL - DECRETO 1507 DE 2014	VALOR PORCENTUAL ASIGNADO - JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA (08-NOV-2019)	VALOR PORCENTUAL ASIGNADO - MÉD. ESP. JOSÉ WILLIAM VARGAS ARENAS (23-DIC-2019)	DOCUMENTO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	OBSERVACIONES
Deficiencias por alteraciones del sistema endocrino.	Hipotiroidismo no especificado	Capítulo 8.	5,00%	8,00%	págs.18 a 30, doc.03, carp.01.	La noción de adherencia al tratamiento solo se observa en el dictamen de la JRCIA
Deficiencias por alteraciones al sistema visual.	Ambliopía ex anopsia (agudeza visual - sistema visual)	Capítulo 11.	14,00%	19,33%	págs.18 a 30, doc.03, carp.01.	La JRCIA tuvo en cuenta el componente "agudeza visual". El méd. esp. José William Vargas Arenas tuvo en cuenta el componente "sistema visual"
Deficiencias del sistema nervioso central y periférico.	Síndrome del túnel carpiano bilateral - operada mano derecha.	Capítulo 12.	6,80%	13,14%	págs.18 a 30, doc.03, carp.01.	La JRCIA calificó el síndrome del túnel del carpo en la mano izquierda. El méd. esp. José William Vargas Arenas tuvo en cuenta el síndrome de túnel del carpo en ambas manos.
Deficiencia por alteración de las extremidades superiores e inferiores	Enfermedades del tejido conectivo que involucra el sistema osteomuscular	Capítulo 14.	NA	24,00%	págs.18 a 30, doc.03, carp.01.	La JRCIA no calificó deficiencias en este punto. Dejó constancia que conforme con las resultados de la prueba de radiología del 26-abr.-2018: <i>"DEDOS MANOS - DESCARTAR AR HALLAZGOS. No hay alteración de la mineralización ni del desarrollo como tampoco procesos osteoarticular y de formantes en espacios interfalángicos. Moderados cambios atrosicos degenerativos en primera articulación carpo metacarpiana"</i> .
Porcentaje de PCL			36,52%	54,72%	págs.18 a 30, doc.03, carp.01.	NA
Fecha de estructuración			7-mar-19	16-feb-18	págs.18 a 30, doc.03, carp.01.	La JRCIA ratificó la fecha de estructuración fijada por COLPENSIONES conforme con la consulta de oftalmología del 07-mar-2019, donde la administradora del RMPD consignó: <i>"Oftalmología 07/03/2019: la causa de disminución de la visión por Os es por desarrollar ambliopía desde la niñez no corregido"</i> . El méd. esp. José William Vargas Arenas fijó la fecha de estructuración de acuerdo con los conceptos médicos de la NUEVA EPS, explicando: <i>"EMG MIEMBROS SUPERIORES ATRAPAMIENTO LEVE DEL NERVIO MERIDIANO BILATERAL. HISTORIA DE STC YA SE HA REALIZADO TERAPIA FISICA(sic), REFIERE ENCALAMBRAMIENTO, PERDIDA(sic) DE FUERZA, SE LE CAEN LAS COSAS DE LAS MANOS, TRAE EMG ANORMAL CON NEUROPATIA(sic) DEL MEDIANO POR ATRAPAMIENTO BILATERAL LEVE. AMBAS MANOS CON SINDROME(sic) DEL CARPO DE MAS DE DOS AÑOS DE PREDOMINIO IZQUIERDO MAS EN LAS NOCHES Y AL MANECER(sic) USO DE MUÑEQUERA NOCTURNA Y TERAPIAS SIN RECUPERACION(sic) TINEL Y PHALEN POSITIVOS DE SINTOMATOLOGIA(sic) MUY SEVERA A LOS RX DE LAS MANOS ARTROSIS PRIMARIA EMG STC LEVE SE PROGRAMA CIRUGIA(sic) DE LA MANO IZQUIERDA"</i> .

En ese sentido estimó el médico especialista, que en el sistema endocrino hay alteraciones en la glándula tiroides y presenta hipotiroidismo sin otros síntomas, lo que ubica a la patología en clase 1; destacando que no se allegó una ecografía de tiroides para determinar que tan aumentada se encuentra la glándula y por eso la JRCIA la determinó como normal, justificando así la diferencia de 3 puntos en ambas valoraciones. De las deficiencias del sistema visual de la actora, relató que la JRCIA tuvo en cuenta puntualmente el componente de la “agudeza visual”, mientras que en el dictamen pericial que rindió, valoró también el componente de “campos visuales” por la patología de ambliopía, no tenido en cuenta por la JRCIA, explicando que el sistema visual se integra por la campimetría, la motilidad visual y la agudeza visual. Así, razonó que, al incluir alteraciones del campo visual, se evidenció una diferencia de poco más de 5 puntos respecto de los hallazgos de la JRCIA.

*A posteriori*, explicó las discrepancias en la valoración de las deficiencias del sistema nervioso central y periférico, recalcando que el resultado de 6,80% que obtuvo la JRCIA obedece a que la entidad calificadora tuvo en cuenta el síndrome del túnel del carpo de la mano izquierda únicamente, cuando la historia clínica es clara en señalar que la patología se encuentra presente en ambas manos de la paciente, tal y como lo muestra la electromiografía aportada al expediente; de ahí que el porcentaje que otorgó en este elemento corresponda al 13,14%.

Por otra parte, a diferencia de los hallazgos de la junta calificadora, consideró una afectación de las extremidades superiores, las que atribuyó a la patología de osteoartrosis que padece la señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID; sustentada en la deformidad en la mano izquierda y la rigidez matinal que da cuenta la historia clínica (págs.40 y 105, doc.03, carp.01), así como en el examen físico que le practicó al momento de la consulta, donde encontró dolor en las articulaciones, especialmente en el primer y tercer dedo con signos de sinovitis y fuerza disminuida. De igual modo, acotó que se trataba de una artrosis leve que cumple los requisitos para ser clasificada como clase 2, asignándose una puntuación media del 24%, por no haber compromisos de osteoporosis. Sostuvo que la osteoartrosis, a diferencia del túnel de carpo, que se diagnostica con examen de electromiografía, debe ser calificada con signos radiológicos a nivel de articulaciones interfalángicas y metacarpianas, así como por signos clínicos por examen físico que dé cuenta de desviación y deformidad de la mano, junto con signos de sinovitis.

Finalmente, enfatizó que la demandante no debe ser valorada en el rol laboral, como lo hizo la JRCIA, sino en el rol ocupacional, aseverando que el Manual Único de Calificación de la Invalidez – MUCI está diseñado para evaluar individuos en edad económicamente activa, niños, adolescentes y adultos mayores que no trabajan. Es por ello que, dadas las circunstancias especiales que rodean a la señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID, persona mayor de 60 años desempleada, y a lo consignado en la tabla nro. 14, los componentes a valorar corresponden a tiempo libre-esparcimiento y limitaciones en otras áreas ocupacionales para adultos mayores. Entretanto, a la población económicamente activa, que incluye personas que trabajan o que están buscando empleo, menores trabajadores, pensionados y adultos mayores que laboran, son valorados con los criterios de rol laboral, autosuficiencia económica y edad (minuto 00:02:48 a 01:19:08, doc.64, carp.01).

Llegado a este punto, se impone recordar que el compendio normativo llamado a reglar la valoración probatoria de los dictámenes periciales, se encuentra entre otros, en el artículo 232 del CGP, el cual señala:

*“Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las*

*reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.*

Significa lo anterior que, el juicio de admisibilidad y aun el grado de convicción de la prueba pericial se encuentra determinada por la fiabilidad del ejercicio intelectual del experto, a la vez de la verificación de la existencia de criterios racionales y un nexo coherente y suficiente entre la valoración y la conclusión a la que llegó aquel; aspectos éstos que se muestran robustos y consistentes en el dictamen emitido por la junta calificadora hoy demandada. Ello, en atención a que dicho organismo en el dictamen allegado, justificó con la exhaustividad, precisión y rigurosidad que se reclama en los procesos de esta naturaleza, la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de las enfermedades que padece la solicitante, tomando, entre otros, como elementos demostrativos la historia clínica, los conceptos médicos y las pruebas específicas que reposan en el cartulario, destacándose entre otros, consultas externas con medicina general y fisioterapia, así pruebas de electrodiagnóstico y radiología.

En este derrotero, la JRCIA en la valoración física encontró:

*“Paciente con las patologías descritas, paciente aqueja dolor en columna lumbar no operada, cirugías de STC -síndrome del túnel del carpo- bilateral, trabajo(sic) en Venezuela en labores de cerrajería(sic), paciente es hipertensa, hipotiroidea, aqueja disminución de la AV -agudeza visual- por ambos ojos, pérdida(sic) mayor por ojo izquierdo, aqueja dolor en ambas rodillas, no estudiadas, aqueja urgencia urinaria, prolapso, paciente sin otras patologías(sic) orgánicas(sic) sin quejas emocionales, examen mental normal. Operada del túnel del carpo derecho hace 1 y medio mes y del izquierdo hace 8 meses. (...) está en terapia física. (...) Osteomuscular: muñecas cicatriz QCA izquierda no retraída, derecha cubierta, logra pinzas con FM 4/5 -fuerza muscular-. (...) Columna vertebral: acusa dolor la percusión superficial de la columna dorsal y lumbar, arcos con restricción leve, no signos de irritación radicular en el momento. Marcha independiente” (págs.22, doc.03, carp.01).*

De lo transcrito emerge sin lugar a equívocos que el *a quo* apreció en su correcta dimensión el dictamen emitido por la JRCIA, en tanto el mismo es claro en cuanto a las patologías que padece la actora y su valoración ponderada en cada una de las deficiencias allí anotadas. Al efecto, debe comenzar por precisar la Sala, que en los componentes de “alteraciones al sistema visual” y “alteraciones al sistema nervioso central y periférico”, no se avizora ninguna disconformidad, en tanto en cuanto, si bien es cierto, la patología denominada *ambliopía ex anopsia* que impacta el primero de los sistemas puede derivar en afectaciones del campo visual, no lo es menos que, el examen diagnóstico en que basó sus conclusiones el médico

José William Vargas Arenas corresponde a un estudio de campo visual central o periférico computarizado en ambos ojos – campo visual 24-2 SITA estándar (págs.190 a 191, 206, 208 a 209, 211, 254, 257 y 259 a 260 doc.03, carp.01) el que, valga decir, no es el idóneo para tales propósitos, en razón a que el MUCI exige, para efectos de la calificación de PCL, una evaluación del “...**campo completo de 60° (Humphrey 60-2 o el equivalente), pero se admite un campo de 30° de visión central (Humphrey 30-2 o el equivalente)**”; en virtud de que el numeral primero del ítem “11.31.1 – exámenes que evalúa el campo visual” del Decreto 1507 de 2014 dispone que la perimetría automatizada “[s]e realiza con equipos de las marcas comerciales Humphrey®, Octopus®, Dicon® y otras. El análisis del campo visual computarizado se basa en los valores numéricos obtenidos y en los análisis estadísticos de los mismos; el resultado se registra gráficamente como una escala de grises. **Evalúa usualmente hasta los 24°, que son los de mayor importancia en el diagnóstico; no obstante, para efectos de la calificación se debe extender hasta los 60°** utilizando para ello el estímulo de 10 dB”.

En el panorama legal descrito, traslúcido se muestra que las resultas de la prueba practicada a la accionante, con arreglo a lo previsto en el MUCI, no podían servirle de parámetro ni antecedente al galeno para calificar el componente del campo visual como así lo pretendió justificar; desestimándose así los errores endilgados en lo evaluado por la JRCIA.

En lo que concierne al sistema nervioso central y periférico, ambas experticias coinciden en el diagnóstico de la patología del síndrome del túnel del carpo, sin embargo, sólo el examen de la JRCIA tuvo en cuenta la operación de liberación de nervio mediano izquierdo, llevada a cabo en septiembre de 2018 (págs.181 a 183; doc.03, carp.01) y la practicada en su mano derecha, aproximadamente en el mes de agosto de 2019; pues no de otra forma se explican las observaciones sentadas por el equipo de la JRCIA al momento de realizar el examen físico: “Operada del túnel del carpo derecho hace 1 y medio mes y del izquierdo hace 8 meses. (...) está en terapia física. (...) Osteomuscular: muñecas cicatriz QCA izquierda no retraída, derecha cubierta, logra pinzas con FM 4/5 -fuerza muscular-” (pág.22, doc.03, carp.01); circunstancias que al parecer, no fueron ponderadas por el médico especialista, quien a pesar de reconocer que se trata de un “**síndrome de túnel carpiano bilateral liberados quirúrgicamente**” (pág.27, doc.03, carp.01), aseguró en la vista pública que la calificación que le otorgó a la deficiencia en el sistema nervioso central y periférico lo sustentó en la prueba de electromiografía de la demandante llevada a cabo el 03-feb-2018 (pág.80. doc.03, carp.01), esto es, antes de que fueran realizadas las intervenciones quirúrgicas de liberación de nervios en septiembre de 2018 y en el año 2019. Lo enunciado para significar que, es menester desestimar, el ejercicio inferencial al que arribó el profesional de la medicina en este punto, por no encontrarse

corroborado en un estudio posterior a las intervenciones quirúrgicas o cualquier otro soporte acreditativo que lo respalde.

De manera semejante, en lo que respecta a las deficiencias por alteración de las extremidades superiores que encontró el médico Vargas Arenas por motivo de la patología de osteoartrosis (págs.26 a 30, doc.03, carp.01), la Sala arriba a idéntica conclusión, en la medida en que, este profesional basó su diagnóstico en el examen físico que practicó el día de la valoración, donde anotó: “...[m]anos dolor en metacarpofalángicas e interfalángicas proximales especialmente en primer y tercer dedo con signos de sinovitis (rubor y calor en metacarpofalángicas) con fuerza 2/5”; no precisando en las resultas del examen físico, que se apoyó en alguna ayuda diagnóstica avanzada, así como tampoco manifestó el grado o nivel de compromiso articular en los dos dedos y de la deformidad de manos a las que hizo alusión, para entender fundada la decisión de otorgarle a este componente un peso del 24%.

Así, para esta Sala de Decisión, las anteriores falencias se exhiben insuperables, puesto que, el único examen que figura en el plenario corresponde a una radiografía del 26-abr-2018 (pág.79, doc.03, carp.01), la cual encontró cambios degenerativos en un solo dedo, tal y como consta al consignar: “*DEDOS MANOS - DESCARTAR AR HALLAZGOS. No hay alteración de la mineralización ni del desarrollo como tampoco procesos osteoarticular y deformantes en espacios interfalángicos. **Moderados cambios artrosicos**(sic) **degenerativos en primera articulación carpo metacarpiana**”.* Siendo ello así, las ponderaciones del perito frente al compromiso de una segunda articulación y en lo concerniente al 24% como valor otorgado a esta deficiencia, no encuentra asidero en los elementos suasorios adunados al diligenciamiento judicial como se expuso, deviniendo con ello el fracaso del ataque formulado por el aquí opugnante. Similar situación acontece con las alteraciones del sistema endocrino, pues a pesar de que el doctor José William Vargas Arenas reconoció que no existe un examen clínico que muestre el tamaño real de la glándula tiroides, aumentó en tres puntos porcentuales el valor otorgado por la JRCIA, no siendo compartida por la Sala esta valoración en razón de esta falencia.

Al margen de lo dicho, si la Sala, sin distanciarse de esas premisas incuestionadas, analizara la pertinencia de la calificación del rol laboral efectuada por la JRCIA, y en su lugar, se concluyera la necesidad incontrastable de calificar el rol ocupacional, por ser la actora una persona mayor de 60 años que se encuentra desempleada, tal situación por sí sola, no tiene la entidad suficiente para anular en su integridad el dictamen de PCL objeto de disenso, toda vez que, en el terreno de lo razonable y lógico, los desatinos antes puntualizados con exactitud truncan el éxito de las reflexiones defendidas por el médico Vargas Arenas en el dictamen arrimado al libelo gestor.

Así lo que queda en evidencia, es que el dictamen de la JRCIA es el que mejor asidero científico tiene con grado de certeza respecto del estado de salud de la actora, conforme con la historia clínica, la evidencia científica, los exámenes diagnósticos y demás pruebas técnicas pertinentes, con arreglo a los preceptos regulativos de esta materia.

Con todo, para enervar toda posibilidad de éxito a la apelación de la deprecante, se impone agregar que, la Corporación no desconoce que actualmente los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional<sup>1</sup> se han focalizado por adoptar el modelo social de la discapacidad, según el cual: *“el origen de la discapacidad no atiende a factores religiosos o médicos, sino sociales”*; explicando que son las barreras dentro de la misma comunidad que integra y no el estado de salud del sujeto, lo que da origen en últimas a la discapacidad y obstaculizan el acceso a derechos y garantías fundamentales en igualdad de condiciones; tal y como también lo analizó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la providencia CSJ SL1171 de 2022<sup>2</sup>.

Así mismo, asienta la jurisprudencia de la máxima autoridad en lo constitucional que, el modelo social de discapacidad encuentra asidero, de forma capital, en los siguientes ejes: *“... (i) la dignidad humana, (ii) la autonomía e independencia individual, (iii) libertad de tomar las propias decisiones, (iv) la no discriminación, (v) la participación plena y efectiva en la sociedad, (v) la accesibilidad y (vi) la igualdad de oportunidades. Estos ejes son esenciales para comprender el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”*;

Sin embargo, la adopción del modelo social de discapacidad no se traduce en despojar de fuerza demostrativa a los dictámenes técnico científicos, como lo sugiere la censura, como quiera que, la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica y reiterativa al indicar que aunque los jueces del trabajo tienen plena competencia e idoneidad para examinar los hechos que estructuran la invalidez calificada, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto; **“[e]llo, por supuesto, *no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias,***

<sup>1</sup> Sentencia C-025 de 2021.

<sup>2</sup> De esta manera, y con ocasión del paradigma que implementa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este concepto migra de la condición exclusivamente individual relacionada con una limitación física, mental o sensorial de una persona, para implantarse en la sociedad como organización colectiva funcional. Así, la discapacidad no se predica de la persona misma sino de los entornos sociales que potencialmente pueden ser discapacitantes, en función de las barreras con las que se enfrenta quien tiene alguna deficiencia biológica. (...) El modelo social de discapacidad apunta en otra dirección. Como se dijo, se funda en el reconocimiento de las afectaciones o limitaciones transitorias o permanentes en la salud de las personas como algo connatural a la esencia humana misma. Entonces, los obstáculos para la inserción social o la plenitud de la efectividad de los derechos, no se producen por aquella disminución física, mental o sensorial –lo cual, se insiste, es natural-, sino por las interacciones con el entorno,

**discapacidades y minusvalías**” (SL-5280 del 31-01-2018, radicado 76993, SL-1044 del 20-03-2019, radicado 68074, y SL2349 del 28-04-2021, radicado 83859).

Lo que viene de decirse, es suficiente para CONFIRMAR el fallo de primer grado en cuanto desestimó todas y cada uno de los pedimentos formulados por la señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID en contra de la JRCIA y COLPENSIONES E.I.C.E.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en atención a que el recurso formulado por la señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID no tiene vocación de prosperidad, razón por la cual a su cargo se impondrán las costas, en atención a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho de manera proporcional y en favor del extremo plural pasivo, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### 4. RESUELVE

**PRIMERO:** CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de junio de 2023 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL impulsado por LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, según y conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUDO:** COSTAS en esta instancia a cargo de la señora LUZ ELENA DEL PILAR MOLINA CADAVID, fijándose como agencias en derecho, en favor del extremo plural pasivo y de forma proporcional, la suma de un SMMLV equivalente \$ 1.160.000.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, aplicando el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

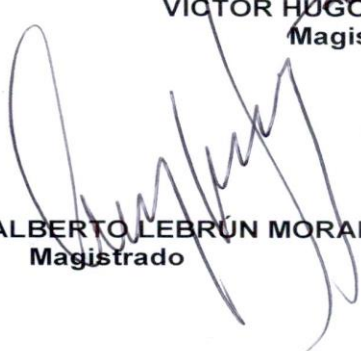
Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES  
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

#### CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario